



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA

Tunja, ocho (8) de agosto de dos mil diecinueve (2019)

MEDIO DE CONTROL: Nulidad y Restablecimiento del derecho –
llamamiento en garantía
DEMANDANTE: María Clemencia Bohórquez Gorraiz
DEMANDADO: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP
RADICACIÓN: 15001 3333 004 **2018 00227 00**

Procede el Despacho a resolver la solicitud de llamamiento en garantía presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y de Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP contra Fiscalía General de la Nación, el día 7 de junio de 2019 reiterada el 12 de julio del mismo año.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

La señora **María Clemencia Bohórquez Gorraiz** promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la UGPP, con el fin de que se declare la nulidad parcial de la Resolución RDP 021968 de 10 de junio de 2016, que reconoció a su favor una pensión vitalicia de vejez.

A título de restablecimiento del derecho, entre otros, pretende la reliquidación de su pensión de vejez en cuantía del 90% de lo devengado en el último año de servicios con la inclusión e los factores salariales a que tiene derecho.

2. La solicitud de llamamiento en garantía

La apoderada de la UGPP llamó en garantía a la Fiscalía General de la Nación, argumentando que la demandante prestó sus servicios a esa institución, y que dicha pensión se liquidó con base en los factores salariales sobre los cuales realizó aportes el empleador.

Así mismo, señaló que el reconocimiento de la pensión depende de los aportes a seguridad social por parte del empleador; por consiguiente, las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación fueron fundamentales para la expedición de los actos cuya nulidad se pretende, por lo que en caso de una eventual condena se generaría un perjuicio económico injustificado a la UGPP.

Por tal razón, aseguró que la entidad empleadora tiene la obligación legal de pagar las sumas adeudadas por concepto de factores salariales que, en sentir de la demandante, debieron tenerse en cuenta en la liquidación de su pensión.

II. CONSIDERACIONES.

El artículo 225 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo regula la figura del llamamiento en garantía, el cual consiste en solicitar la intervención de un tercero con el fin de garantizar la reparación de un perjuicio que pudiese llegar a sufrir con ocasión de una decisión judicial o también, con el objeto de obtener el reembolso de los dineros pagados que se derivan de una condena. No obstante, la norma exige para su procedencia la existencia de una relación legal o contractual entre quien llama en garantía y el llamado.

Frente a la existencia de la obligación legal de indemnización o de acudir al llamamiento, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que, esta “**se refiere a la existencia de una norma que determine que en un momento dado, un tercero ajeno a la relación procesal trabada en el asunto de que se trate, deba entrar a responder por los actos o hechos que son objeto de cuestionamiento en el mismo; es decir, que debe existir una norma que imponga la obligación a cargo de éste, de resarcir un perjuicio o de efectuar un pago que pudiera ser impuesto en la sentencia que decida el respectivo proceso**¹ (Negrita fuera del texto)

De igual modo, la norma citada establece que el llamamiento en garantía con fines de repetición se regirá por las normas de la Ley 678 de 2001; por consiguiente, a la luz de lo dispuesto en el artículo 19 *ibídem*, la entidad pública perjudicada o el Ministerio Público pueden solicitar el llamamiento en garantía del agente frente al que aparezca prueba sumaria de su responsabilidad.

III. CASO CONCRETO.

La UGPP pretende que se vincule como llamado en garantía a la Fiscalía General de la Nación, por cuanto, fue el empleador de la demandante, para que en el caso que se profiera sentencia condenatoria, proceda a cancelar los aportes sobre los factores base de liquidación.

Al respecto, se encuentra que no se cumplen con los requisitos atrás señalados, en la medida que no se advierte la existencia de relación legal o contractual que permita a la UGPP llamar en garantía a la Fiscalía General de la Nación, a efecto de responder por la condena que eventualmente pueda producirse contra la administradora de pensiones, por cuanto, el derecho que se reclama del llamado en garantía no es el mismo respecto al cual se planteó la litis, pues la pretensión principal de restablecimiento de derecho es la condena a la reliquidación y pago de la pensión de vitalicia de vejez devengada por la demandante, así como el pago de las diferencias causadas en las mesadas pensionales, mientras que del llamado en garantía se reclama el giro de unos aportes.

Es del caso, mencionar que el artículo 24 de la Ley 100 de 1993 estipuló como obligación de las entidades administradoras de pensiones, adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador,

¹ Consejo de Estado- Sección Segunda – Subsección A. auto interlocutorio del 1 de agosto de 2016. C.P. William Hernández Gómez. Expediente núm. 4054-2014:

señalando que para el efecto, la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito ejecutivo, disposición reglamentada por el Decreto 2633 de 1994.

En consecuencia, de acontecer la condena la reliquidación de la prestación estaría en cabeza de la UGPP, por ser la entidad encargada de efectuar el reconocimiento y pago de la pensión vitalicia de vejez a la demandante, asistiéndole de igual manera la obligación de ejercer el cobro coactivo contra la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con los mencionados preceptos jurídicos.²

Los anteriores argumentos, han sido esgrimidos por el Tribunal Administrativo de Boyacá para negar los llamamientos en garantía formulados contra los empleadores en casos como el presente. Al respecto señaló:

"Así entonces, si lo que plantea la entidad llamante es que la llamada dejo de efectuar descuentos o cotizaciones para pensión a los que estaba obligada y, en consecuencia, debe ser condenada a su pago en este proceso, es claro que la obligación no emergería de la ley que se invoca y el proceso para su recuperación, si es del caso, sería la vía ejecutiva y no el restablecimiento del derecho.

(...)

En este caso, no es el aspecto probatorio lo que lleva a considerar que no procede el llamamiento en garantía sino razones diferentes, consistentes en el que el debate que plantea esta demanda solo permite definir el derecho o no al reconocimiento pensional que se demanda y no el deber de pago de aportes pensionales por parte de la llamada en garantía.

(...)

Es decir, ha sido uniforme y reiterado el criterio de este Tribunal, en concordancia con el del Consejo de Estado, que es improcedencia el llamamiento en garantía de las entidades para las cuales ha laborado quien demanda ante la entidad de seguridad social el reconocimiento pensional, dado que el tema en debate no es el pago de aportes por las entidades empleadoras, ni estas tienen deber alguno de responder por el derecho pensional en sí mismo"³

En otro pronunciamiento, frente al mismo tema que se analiza en el *sub lite*, el Honorable Tribunal indicó:

"En conclusión, y teniendo en cuenta que la demanda se dirige a la obtención de la declaratoria de nulidad de los actos administrativos que omitieron la

² A esta conclusión arribó el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en auto del diecinueve (19) de julio de dos mil dieciocho (2018), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, radicación 25000-23-42-000-2015-02145-01(4598-16), al resolver asunto se similares contornos al que nos ocupa.

³ Tribunal Administrativo de Boyacá, radicado N° 15238333300220160024901, providencia del 18 de julio de 2017, Magistrada Ponente: Dra. Clara Elisa Cifuentes Ortiz.

reliquidación de la pensión del demandante, tal decisión no podría vincular más que a la entidad que expidió dichos actos y no a las entidades con las que la accionante de la prestación social tuvo vínculo laboral, pues si bien es cierto lo afirmado por el llamante en cuanto al Instituto Nacional de Vías es el que debe realizar los aportes de pensión, también es cierto que a quien corresponde el reconocimiento y pago de las pensiones es a la UGPP y, no por ello se configura una relación legal o contractual que sustente la petición de llamamiento en garantía.”⁴

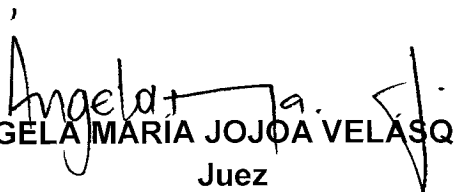
Así las cosas, la entidad demandada no puede pretender a través de la figura del llamamiento en garantía en un proceso de reliquidación pensional, acceder al pago de lo dejado de recibir por concepto de aportes para pensión. Aceptar la solicitud de llamamiento en garantía desdibujaría el objeto de la litis y de esta figura procesal, establecida para *'la reparación integral del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia'* (Art. 225 CPACA).

Por lo expuesto, se

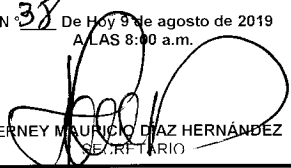
RESUELVE:

PRIMERO.- NEGAR el llamamiento en garantía de la Fiscalía General de la Nación, formulado por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por las razones expuestas en la parte motiva.

Notifíquese y cúmplase.


ÁNGELA MARÍA JOJOA VELÁSQUEZ
Juez

⁵cc

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA
NOTIFICACIÓN POR ESTADO
LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO ELECTRÓNICO
N.º <u>38</u> De Hoy 9 de agosto de 2019 A LAS 8:00 a.m.
 FERNEY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ SECRETARIO

⁴ Tribunal Administrativo de Boyacá 25 de mayo de 2018, Expediente N° 15001-33-33-011-2017-00039-01, Magistrado Ponente: Dr. Luis Ernesto Arciniegas Triana

⁵ Esta providencia fue notificada en estado electrónico el 9 de agosto de 2019 en la página web www.ramajudicial.gov.co.
Ferney Mauricio Díaz Hernández – Secretario.